

Seguimos sin plan

Desde hace varias semanas está en la calle el plan PERE (Programa de Estabilización y Recuperación Económica). El país recibió el anuncio del gobierno con gran expectativa, porque parecía que estábamos pasando de una a otra fase de gobierno. Desde que se inició la presidencia del Dr. Caldera y el período legislativo del actual parlamento nacional, la conducción del país se ha hecho en base a «medidas» de corto alcance para salirle al encuentro a las más variadas circunstancias. El anuncio de un plan económico nos hacía pensar en el inicio de una transición hacia la dirección del país con políticas de Estado a largo alcance. Muy pronto la ilusión se está desvaneciendo. La lectura y análisis del plan PERE, así como las discusiones de los responsables de la política económica del gobierno, nos permiten concluir que éste es insuficiente. En lo económico debe ser completado con un plan de desarrollo, al parecer en proceso de elaboración. Pero, sobre todo, notamos el vacío político en torno a este programa. No se ven los pies ni las manos, socialmente necesarios, para echarlo a andar. Seguimos, pues, sin un plan eficiente y asumido por todo el tren ejecutivo que oriente armónicamente la economía del país. Mientras tanto continúa la experiencia de la economía cotidiana de miles de venezolanos en la que los sueldos se los come la inflación, por muy controlados que estén algunos precios; los conflictos laborales amenazan con desbordar la capacidad real de conducirlos a buen término; la desesperación termina en saqueos a los comercios; el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad es la preocupación central de muchos hogares; la recesión de las industrias mantiene paralizados a miles de trabajadores...

Hace poco el propio ministro de Cordinplan se encargó de darnos a conocer en cifras la angustiada situación que padece el pueblo venezolano. El desempleo ha crecido a un 13,5%, y el 55% de los trabajadores ocupados lo están en la economía informal. El 60% de la población vive en condiciones de pobreza, con la soga al cuello de una inflación que se eleva hasta el 60%. La sensación generalizada es que el barco se hunde y seguimos sin plan para ponerlo a flote.

Inflación sin frenos

El plan PERE se divide en dos grandes propuestas. La primera de ellas se dirige a estabilizar la economía a través del control de la inflación, para lo cual se establece un lapso de año y medio. La segunda parte se refiere a los lineamientos estratégicos para la transición de la Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Para controlar la inflación se hace uso de dos mecanismos. El primero consiste en el aumento de los impuestos para equilibrar el presupuesto de 1995; la meta es alcanzar para este año una tributación interna del orden del 12,5% del Producto Interno Bruto. El segundo mecanismo ha sido considerado como la clave del plan y consiste en reducir el exceso de liquidez

monetaria que distorsiona la dinámica económica. De acuerdo al diagnóstico hecho, los auxilios concedidos a los bancos por el orden de 800 mil millones de bolívares, junto a una política fiscal expansiva, incrementaron la masa de dinero en poder del público más allá de lo conveniente. Durante la primera mitad del año, esa masa de bolívares sobrante en la economía se drenó hacia la compra de divisas y de bonos cero cupón. Para frenar la compra de divisas, y con ella la caída de reservas y el ataque especulativo contra las mismas, se introdujo el pasado decreto sobre el control de cambios. Sin embargo, continuaba vigente el problema de la bola de nieve que representan los bonos cero cupón, pues por sus cortos plazos y altos rendimientos devuelven continuamente a la economía masas de dinero mayores que las sustraídas. Para darnos una idea, los bonos cero cupón se incrementaron de 70 mil millones de bolívares a principios de año a 600 mil millones de bolívares a mediados de este año.

La solución ofrecida por el PERE fue sustituir estos bonos cero cupón por títulos de Fogade a largo plazo. Mediante esos títulos Fogade podía cancelar parte de su deuda con el BCV, de forma tal que el déficit contraído por la República se pudiera cubrir. Para hacer atractivos esos bonos se pensó en denominarlos en dólares y dotarlos de la garantía de un fideicomiso nutrido con parte de la regalía petrolera de los próximos nueve años.

El mecanismo ha sufrido un lento proceso de consultas y discusiones con los más variados sectores del país y especialmente dentro de los actuales cuadros de la administración y gerencia del Estado. El resultado es que la clave del plan está enfrentando poderosas resistencias, con el agravante de que mientras tanto los bonos cero cupón que se van venciendo entran de lleno a inundar con su liquidez la economía u obligan a nuevas emisiones con altos intereses, con lo que la inflación sigue en aumento. A estas alturas seguimos sin plan para atacar la inflación, sin el plan PERE y sin ningún otro; fundamentalmente porque dentro del mismo gobierno no existen los consensos y acuerdos fundamentales al respecto. Ni siquiera el propio presidente Caldera lo ha asumido como su plan frente al país. Además, como corolario, las metas sobre contención de la inflación que el mismo plan se ha propuesto para éste y el año próximo ya están siendo seriamente cuestionadas por los mismos voceros gubernamentales. Con lo cual se nos deja ver que el mismo gobierno cree poco en sus proyecciones y posibilidades.

Venezuela rentista

El plan es consciente de las implicaciones que supone para el país adoptar su propuesta para pagar la deuda de FOGADE con el BCV haciendo uso de parte de la regalía petrolera de los próximos 9 años. Textualmente sostiene que el servicio de esa deuda comprometerá el ingreso petrolero fiscal futuro de la república. Las ganancias de los banqueros se repartieron

exclusivamente entre ellos; las pérdidas en cambio se distribuirán entre todos los venezolanos. Curioso razonamiento es éste en el cual el disfrute de las ganancias es privado mientras que el sinsabor de las pérdidas es colectivo. Como si fuera poco, el Dr. Caldera se atreve a decir que su habilidad política supo sortear una de las crisis financieras más terrible del mundo, salvando de esa manera la patria. Propiamente hablando no se salvó la patria. Se intentó salvar a los banqueros que se burlaron de las prescripciones legales para enriquecerse más. Esa atención especial a los bancos le ha costado al país un alto índice de inflación más el compromiso de parte de la renta petrolera del futuro para solventar el problema.

Salvando las distancias, la historia se parece bastante a la que presenciamos en 1983. En ese año descubrimos que teníamos una deuda con el exterior calculada en 32.000 millones de dólares. El origen de esa deuda fue la transferencia excesiva de ahorro financiero del sector público hacia el sector privado durante una década aproximadamente. Mientras tanto, las empresas del Estado no pudieron cubrir sus déficit financieros y tuvieron que endeudarse con el exterior. El costo de esa deuda se cargó a la renta petrolera futura. Ayer como hoy, empresarios y banqueros aprovecharon exclusivamente en forma privada sus ganancias. Está comprobado que el superávit que la inversión privada obtuvo entre 1973 y 1983, gracias al apoyo financiero del Estado, no se invirtió en el país sino que salió al exterior en búsqueda de mejores rendimientos. Sin embargo, las pérdidas de toda esta operación macroeconómica sí fueron impuestas a toda la nación mediante el oneroso pago de unas acreencias que comprometen año tras año nuestro presupuesto.

El vicio de la Venezuela rentista permanece intacto. Empresarios y banqueros obtienen ganancias al amparo del Estado y sus recursos, cuyo disfrute es exclusivamente privado. La ley se revierte cuando sobrevienen las pérdidas, porque éstas dejan de ser privadas para hacerse colectivas. No sabemos cuál es el fatídico sortilegio por el que de repente las pérdidas de los privados tienen que ser asumidas por todos, y salvar a banqueros y empresarios es salvar a la patria.

Modernización incompleta

El plan PERE pretende modernizar el Estado venezolano en un aspecto crucial para el mismo, como es su capacidad real de imponer impuestos a la población y recabarlos eficientemente. De esta manera, el Estado daría algún paso en el cumplimiento de una de sus funciones ineludibles: contribuir a la redistribución de la riqueza. Creemos que la población venezolana está dispuesta a entender este importante viraje. Sin embargo, eso exige como contrapartida una auténtica reforma estructural del Estado mediante la cual se garantice su capacidad real de prestación de servicios. Ese cambio es la contrapartida que puede justificar por parte de la población desembolsar recursos en medio de esta precaria situación. Por ello la reforma del Estado no puede ser simplemente una declaración de

principios sino que se tienen que evidenciar algunos gestos de ese cambio para poder empezar a creer en él. La práctica cotidiana del Estado venezolano nos pone de bruces contra la escasa voluntad política para modernizar su actuación servidora para con la sociedad.

Entre demagogia y populismo

El sistema político venezolano sigue funcionando como lo ha hecho en los últimos 30 años. Se busca la legitimidad de la acción política apelando a una buena dosis de demagogia y mediatizando al pueblo en la toma de decisiones. Uno de los recursos que puede aumentar la base de tributación interna es el aumento de los precios de la gasolina en el mercado interno. Es prácticamente imposible llegar a los niveles necesarios de ingresos públicos para evitar un déficit fiscal que dispare la inflación sin un aumento sustancial de los precios de la gasolina, además de elevar el IVM del 10% actual al 15%. El Dr. Luis Giusti, Presidente de PDVSA, asomó la cifra sobre la que se basan los cálculos estabilizadores. Es necesario subir la gasolina a Bs. 24 por litro a partir de enero de 1995. El tema es muy espinoso y el gobierno está muy consciente de que se juega su popularidad en la adopción de una u otra medida en el asunto. El plan PERE optó por esconder en el capítulo de «otros» los ingresos que piensa obtener por el aumento de precios de este combustible. Evidentemente que el tema no se puede considerar sin las correspondientes consecuencias que tiene en el aumento del costo de la vida; pero precisamente por la relevancia que tiene en el acontecer nacional hay que abrirlo a la discusión pública para llegar a consensos y acuerdos, sin que priven únicamente las consideraciones sobre el deterioro o consolidación de la imagen popular del gobierno.

Lo mismo ocurre con respecto a las declaraciones que hace el PERE sobre el mejoramiento de la calidad del gasto público del Estado como orientación para encauzar adecuadamente los recursos públicos atendiendo a las necesidades reales de la población y dejando de lado otros requerimientos menos importantes. Esa opción lleva el supuesto implícito de una política clara para hacer frente al hervidero de demandas que de muchos lados llegan al gobierno. Especialmente agudo es el problema de las peticiones laborales del ejército de empleados públicos que contienen las nóminas de las instituciones del Estado. Los partidos políticos se han encargado de engordar las listas de empleados públicos como mecanismo mediante el cual se asegura la adhesión de sus militantes. Esa práctica mantiene un circuito cerrado de negociación entre dirigencias sindicales y partidistas con el gobierno de espaldas al país y por debajo de todo criterio establecido dentro de los planes del Estado.

Hasta que no se rompa esta práctica de negociación salarial dentro del Estado no se puede hablar de una política para el gasto público, cuyo principal destino normalmente se compromete entre los oscuros acuerdos partidistas y sindicaleros. Esa transformación es posible si concurren a ella sociedad civil, partidos y gobierno; su costo no es económico sino político y cultural.